

# Nicaragua postrevolucionaria: el laberinto sandinista y la difícil consolidación democrática

\*Salvador Martí

## LA DERROTA ELECTORAL SANDINISTA Y EL INICIO DE LA CONFUSIÓN

“Al saber de la derrota electoral del FSLN me sentí como una mierda. Me pregunté que había hecho para que nos pasara esto. Sentí que lo que había hecho era poco, y me cuestioné las bacanales (...) Me puse helado; pensaba que esto se iba a convertir en una carnicería... Luego apareció Juan Rivas, el pintor, y quisimos formar un comando. Nos montamos en su carro, fuimos para arriba y para abajo. Terminamos borrachos y llorando. Después nos reímos de todo”<sup>1</sup>.

A las seis de la mañana del 26 de febrero de 1990, Daniel Ortega, el candidato a la presidencia del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), expuso la tendencia que ofrecían los resultados electorales sobre la base de un escrutinio del 50% de los votos. Al mediodía, el Consejo Supremo Electoral dio a conocer su último informe: sobre un total de 1.101.397 votos el 54% correspondían a la coalición opositora de la Unión Nacional Opositora (UNO) y el 44% al FSLN. Faltaba el recuento de unos 500 mil sufragios y las tendencias observadas eran irreversibles.

El resultado electoral sorprendió tanto a los analistas y observadores internacionales como a las fuerzas políticas que concurrieron en los comicios. La mayoría de previ-

<sup>1</sup>Investigador del Departamento de Ciencia Política y Derecho Público de la Universitat Autònoma de Barcelona. Miembro del Grupo de Estudios Políticos Centroamericanos (UAB).

siones y encuestas electorales realizadas durante el año anterior otorgaban una notable ventaja a los sandinistas<sup>2</sup>. Los meses anteriores a las elecciones, varios estudiosos de asuntos interamericanos expusieron a la Administración Bush –en diversas editoriales de periódicos norteamericanos (como el *Boston Globe*, el *Miami Herald* o el *New York Times*)– la necesidad de replantear las relaciones políticas entre los Estados Unidos y Nicaragua después del desenlace electoral en el que, supuestamente, ganarían los sandinistas.

La derrota electoral de los sandinistas por una diferencia de casi 14 puntos fue inesperada<sup>3</sup>, y así lo expuso el candidato sandinista a la vice-presidencia, Sergio Ramírez:

“Por muchas que fueran las dificultades provocadas por la guerra, las limitaciones, las penumbras, la inseguridad de la población..., creímos que los votantes no darían nunca la espalda al Frente Sandinista. Era una convicción intelectual y sentimental. La revolución había echado raíces suficientes como para no ser disminuída en unas elecciones. Por eso no teníamos planes alternativos frente a la derrota, ni contemplábamos la posibilidad de perder en unos comicios.

El 26 de febrero, a las seis de la mañana, debía juntarme con Daniel en el Centro de Convenciones Olof Palme para acompañarle en su comparecencia pública. Al salir de la casa me encontré a Ernesto Cardenal, mi vecino de calle de por medio, que siempre madruga, y se había acostado confiado en la victoria... –¿Es cierto que perdimos las votaciones?– me preguntó asombrado”. (Ramírez, 1991: 29-32)

De esta forma, contra la mayoría de los pronósticos, el FSLN perdió las elecciones. Otra cuestión –que no nos corresponde exponer en este espacio– es la de cómo interpretar el resultado de éstas<sup>4</sup>. Sí nos corresponde, sin embargo, observar y ponderar cuáles fueron las consecuencias de la derrota en el sí del sandinismo.

La primera consecuencia de los resultados electorales fue el desconcierto. A partir de ese momento empezó a desarrollarse una fuerte corriente a favor de la reestructuración del partido sobre la base de la redefinición ideológica y la renovación de la estructura organizativa (Castro y Barry, 1990b). Durante la década de los ochenta, la organización partidaria fue coincidiendo y solapándose con la estructura administrativa del Estado, y la pérdida del Gobierno supuso la desaparición de gran parte del aparato partidario y la desvertebración de las líneas de autoridad –hecho que se tradujo en la dispersión de la militancia–.

Hasta entonces, en el FSLN, por su propia naturaleza, las directrices y el consenso se había generado en el interior de la Dirección Nacional (Díaz-Lacayo, 1992:34). La derrota electoral quebró esa dinámica. De la perplejidad y la frustración de la derrota, los miembros sandinistas pasaron a ventilar públicamente los errores y abusos que el FSLN realizó durante los 10 años que estuvo en el poder. En esta erupción expresiva, se mezclaron consideraciones de tipo personal, político y económico (Envío, 1990/103; 1992/134; Vilas, 1991b). La consigna “¡Dirección Nacional ordene!” que acompañó 11 años de Gobierno sandinista cedió paso a un calidoscopio de puntos de vista que

constituyeron lo que se llamó el *debate interno sandinista*; debate que tenía como síntesis la frase acuñada por el popular cantante nicaragüense Luis Enrique Mejía Godoy: “¡Dirección Nacional, escuche!”<sup>5</sup>.

En su inicio, la discusión tomó connotaciones violentas y personales que polarizaron el debate. La explicación del porqué se perdieron los comicios se mezcló con discusiones sobre, no sólo los factores que desvincularon al FSLN de la sociedad, sino también aquellos por los cuales la dirigencia sandinista fue distanciándose de sus bases. Tampoco dejó de mencionarse la forma rápida, desordenada —y algunas veces abusiva— en la que el Gobierno sandinista adjudicó propiedades y recursos estatales en sus últimas semanas de gestión: la llamada *piñata*.

La primera expresión abierta y ordenada del debate fue durante la Asamblea Nacional de Militantes realizada en la localidad de Crucero (ver *Envío*, 1990/105:36-48). En referencia al partido, se reconoció el bloqueo a la crítica, los estilos burocráticos de la conducción política, el verticalismo, el poco espacio que tuvieron las organizaciones de masas para desarrollarse y los estilos de vida de algunos dirigentes (*Envío*, 1990/105). Muchas de estas críticas, que ya se venían denunciando dentro del partido antes de las elecciones, fueron sistemáticamente desestimadas en pro de la cohesión (Vilas, 1991b).

## EL PACTO COMO HERRAMIENTA POLÍTICA: CIRCULACIÓN DE LAS ÉLITES Y LA CENTRALIDAD DE LA VARIABLE CLASE

En el ámbito sociopolítico, los comicios de febrero tuvieron cuatro consecuencias inmediatas: el fortalecimiento del pluralismo en Nicaragua; el encauzamiento de la actividad de las fuerzas políticas partidarias en el marco ofrecido por la Constitución de 1987; la modificación de la correlación de fuerzas en el plano político, social y económico; y, finalmente, la resituación de los actores políticos en relación a su capacidad de control de los resortes del Estado.

De este nuevo escenario político surgirían diversos retos a los que tendrían que hacer frente los diferentes actores: por un lado, la definición del marco institucional en el que canalizar la vida política y, por otro, la desaparición de la arena militar. En dicha coyuntura los actores se verían condicionados a actuar en base a métodos, perspectivas y estilos diferentes a los hasta entonces utilizados. El instrumento central tendría que ser el *pacto* y éste, a la vez, moldearía a los mismos actores. La necesidad de

redefinir el escenario político suponía también un cambio en la misma naturaleza de los actores. Es en este sentido en el que cabe analizar el comportamiento del FSLN .

Utilizando los conceptos generados por la literatura que se ha dedicado a analizar los procesos de cambio de Gobierno en el marco de elecciones competitivas, el proceso electoral nicaragüense ofreció un claro ejemplo de *pacto institucional*<sup>6</sup> a partir del cuál los diferentes actores establecieron acuerdos, reglas de juego y garantías suficientes como para concurrir en unos comicios y asumir la *incertidumbre* que éstos comportaban (McCoy,1991; O'Donell et al.,1986; Przeworski, 1985).

En este sentido, la clave de la cita de Przeworski de que la democracia (nosotros cambiaríamos ese término por el de *elecciones competitivas*<sup>7</sup>) es “el proceso de institucionalización de la incertidumbre, de la subjección de todos los intereses a la incertidumbre, donde ningún grupo puede intervenir ni distorsionar los resultados electorales una vez realizados los comicios” (Przeworski,1985:58); está en el *por qué* (a partir de qué) los diferentes actores están dispuestos a *aceptar la incertidumbre* que supone participar en unas elecciones competitivas.

La respuesta a dicha cuestión es el hecho de que los diferentes actores que participan en los comicios han establecido, previamente, pactos y garantías que atenúan los riesgos de un resultado imprevisible. La cuestión radica, pues, en la existencia de un acuerdo sobre las reglas del juego y en el pacto de que quienes participan en ella les serán respetados sus intereses vitales.

Sin embargo, en Nicaragua, dicho *pacto institucional* no estaba cerrado. El respeto hacia la institucionalidad surgida de la Constitución de 1987 y la desaparición del escenario militar eran las cuestiones pendientes. No existía la seguridad de cuál sería la institucionalidad y la actitud en que la UNO desarrollaría su actividad de Gobierno.

Después de las elecciones el escenario político en que se pretendió cerrar el *pacto institucional*, se restringió a dos de los principales actores políticos: la dirección sandinista y el núcleo de asesores de la nueva presidenta –encabezado por Antonio Lacayo, yerno de Violeta Chamorro y, posteriormente, hombre fuerte del Gobierno nicaragüense–. Dicho *pacto*, como la mayoría de ellos en las coyunturas de cambio de Gobierno o de transformación de regímenes, fue de naturaleza intraelitaria (Agüero y Torca,1993; Gunter & Higley,1992; Karl,1990). El fruto de este intenso período de negociaciones fue el acuerdo llamado Protocolo de Transición del Poder Ejecutivo (PTPE), firmado el 27 de marzo de 1990<sup>8</sup>.

El PTPE supuso, en primer lugar, el establecimiento de disposiciones a partir de las cuales fortalecer el el *Estado de derecho* y, en este sentido, significaba apostar por la estabilidad del sistema político construido a lo largo del proceso revolucionario. Sin embargo, también reflejaba la existencia de un *espacio de intereses comunes* entre un sector del FSLN y otro de la UNO. Desde esta perspectiva, el PTPE tiene que observarse insertado en un contexto político más amplio donde se interrelacionaron cuestiones de carácter ideológico, político, económico, social y, como no, familiar<sup>9</sup>.

Durante los 10 años en que el sandinismo estuvo en el poder se realizaron grandes transformaciones en el seno de la sociedad, sin embargo, cabe señalar que junto a esos elementos de cambio pervivieron también dinámicas y procederes profundamente arraigados en la historia nicaragüense. A pesar del *descubrimiento* sandinista de la sociedad civil, el Estado fue el centro neurálgico de la política. La política oficial se siguió haciendo desde los despachos, pasillos y recepciones. Las negociaciones relevantes se llevaron a cabo desde o con el ejecutivo. Junto con la primacía del Estado, nunca fue erradicado del todo un estilo prebendalista del ejercicio del poder; un estilo que dependía más de las características de una sociedad pequeña y periférica que de la subjetividad de los actores: la vulnerabilidad del mercado, el atraso productivo y la marginalidad en la economía internacional tiene mucho que ver con ello (Vilas, 1991a). Desde esta óptica, en el Gobierno surgido de las elecciones de febrero de 1990, el elemento que más destacó en su configuración fue el del mantenimiento de los patrones de interconexión familiar, por encima de las posiciones políticas explícitas (ver Vargas, 1990:69-71).

En este espacio de intereses comunes entre las elites políticas *salientes* (de militancia sandinista) y *entrantés* (de naturaleza empresarial), y su estilo consociativo, se vislumbra un proceso de progresiva reunificación política de los diversos sectores nicaragüenses en función de la *variable clases*, con relativa autonomía de las ideologías partidarias que polarizaron y enfrentaron a los nicaragüenses durante más de una década.

Esta dinámica está altamente vinculada con la rearticulación y crisis de los actores políticos que parecieron monolíticos durante los ochenta. En los epígrafes siguientes abordaremos el proceso seguido por el FSLN y las consecuencias que éste tuvo (y tiene) en el debate político de colectivos vinculados con el anterior proyecto revolucionario.

## EL FSLN Y LA ADMINISTRACIÓN CHAMORRO: ¿CO-GOBIERNO, COOPERACIÓN O COOPTACIÓN?

Tras el triunfo de la UNO, el conflicto político nicaragüense se definió desde una doble dimensión: *sistémica* y *sustantiva*. En la primera, el ejecutivo Chamorro-Lacayo necesitaba tejer acuerdos interpartidarios con el grupo parlamentario sandinista con el fin de preservar la institucionalidad y la estabilidad política del país; en la segunda, se observaron pactos de clase con preeminencia de los intereses de los sectores económicos dominantes (Gomà, 1994). Por un lado, la clara apuesta del Gobierno por una salida socioeconómica neoliberal reincidió en el conflicto *sustantivo* y supuso el estallido

de tensiones interpartidarias en el FSLN, quien mantuvo un entramado de apoyos con el Gobierno en pos de una estabilidad institucional erosionada por sectores de la UNO no integrados en el ejecutivo.

De esta forma, el desenlace electoral junto con el acuerdo al que llegó la dirección sandinista con el Gobierno entrante, revolviéron las aguas del paisaje político nicara-güense. Dichos acontecimientos fueron el detonante de los conflictos intrapartidarios en los –hasta entonces cohesionados– principales actores políticos.

En el caso del sandinismo, el resultado de las elecciones impactó profundamente en la cohesión interna del FSLN. Las reacciones y la forma en que los diversos colectivos integrados en él percibieron la derrota electoral y su nuevo papel en la escena política, generaron un profundo debate en el seno del sandinismo<sup>10</sup>. Inmediatamente después de las elecciones, el FSLN proyectó una imagen ambivalente: esgrimía defender una posición combativa frente al carácter antipopular de las medidas adoptadas por el Gobierno y, posteriormente, adoptaba el papel de interlocutor –en nombre de la nación y de la democracia– y abría rondas de negociación con el Gobierno. Dicha ambigüedad rápidamente dio cuenta de la coexistencia de enfoques, intereses y tendencias heterogéneas en el seno del Frente Sandinista.

Los retos con que se enfrentó el FSLN fueron varios. Por un lado, estaba la renovación organizativa y, por otro, redefinir su perfil social y su proyecto político. En referencia a la renovación orgánica, el punto de partida fue la redacción de los nuevos estatutos partidarios y su aprobación en el Congreso Nacional de agosto de 1991<sup>11</sup>. Con todo, en este primer congreso, si bien se introdujeron ciertos cambios –sobre todo en referencia a la estructura orgánica–, el FSLN optó por la unidad al precio, eso sí, de limitar la democracia interna y de aplazar ciertos temas de gran calado.

Y, si bien el congreso de agosto de 1991 evitó la confrontación interna entre los diversos sectores del FSLN, las huelgas masivas que paralizaron el país en verano de 1990 fueron el inicio de controversias dentro del Frente Sandinista<sup>12</sup>. A partir de entonces, empezó a explicitarse un debate sobre cuál tenía que ser la *propuesta política y económica* del FSLN para los años venideros. Un sector del sandinismo, articulado a partir de la bancada parlamentaria y de instancias institucionales donde el sandinismo aún mantenía notables cuotas de poder, expresó su deseo de realizar un proyecto de carácter *nacional y pluriclasista*. En esta dirección, el 21 de febrero de 1992, 18 parlamentarios sandinistas publicaron en el periódico *Barricada* un conjunto de directrices políticas bajo el título de “Desde el sandinismo, propuestas para un proyecto nacional”, en este artículo se anunciaba<sup>13</sup>:

“Por primera vez en toda su historia, Nicaragua ha alcanzado la posibilidad real de organizarse como una sociedad moderna, plural, donde los inevitables conflictos y las naturales contradicciones se resuelvan por medios pacíficos y legales (...) Consideramos necesario el establecimiento de un espacio de reflexión y aún más, de acción, que tome distancia

de los extremos polarizados, y lo decimos precisamente en estos momentos en que nuestro partido, el Frente Sandinista, atraviesa su crisis más profunda desde 1975, crisis que debe abrir las puertas a lo interno del partido sobre el rumbo que éste debe tomar. Llamamos a formular y hacer realidad un *Proyecto Nacional* que represente los intereses de todos los sectores, que ponga los intereses de la Patria por encima de los intereses partidistas que sean excluyentes, que comprenda que los intereses de la Patria pasan siempre por soluciones negociadas y no por el enfrentamiento y la confrontación. Proponemos la paz, la reconciliación, la libertad, la democracia, el progreso, la justicia social, y la defensa de los intereses nacionales como proyectos propios de gobernantes y gobernados.”

En la misma sintonía, diferentes líderes sandinistas se manifestaron aduciendo que:

“Hay que construir un FSLN que convoque a todos aquellos que tienen buen puesto el corazón de patriotas; un FSLN capaz de abrirse a todos los sectores sociales de la Nación<sup>14</sup>.

El FSLN tiene que ser claramente pluriclasista. Nunca fue sólo de obreros y campesinos, sino también de pequeños burgueses y burgueses que coincidieron en derrocar a Somoza (...) La única posibilidad que tiene el sandinismo de regresar al poder es que tenga ese carácter, eso no significa que no se va a defender a los más desposeídos, pero ya no tiene sentido plantear la lucha de clases en Nicaragua (...) Tenemos que levantar la economía a través de relaciones armoniosas entre el Capital y el Trabajo”<sup>15</sup>.

Sin embargo, otros sectores del FSLN directamente vinculados al sector sindical agrupado en la central sindical Frente Nacional de Trabajadores (FNT), al aparato partidario y a los líderes que mantienen cierta ascendencia con las bases populares apoyaron las reivindicaciones a partir de las cuáles se llevaron a cabo las huelgas y la movilización popular.

Fueron diversas las declaraciones que reclamaron un mayor compromiso de la dirección del FSLN con las demandas presentadas por dichos colectivos. Entre dicha comunidad hubo quien denunció el comportamiento de la dirigencia sandinista —que optó principalmente por la negociación con el ejecutivo, intentando acallar el resurgir del movimiento popular—. Dámaso Vargas, un dirigente de la Central Sandinista de Trabajadores (CST) —integrada en la FNT— denunció que las huelgas de mayo de 1990 no tuvieron el respaldo de la dirección del FSLN, declarando<sup>16</sup>:

“Hubo acciones sindicales en Managua que la comisión departamental del FSLN no apoyó. Y debo decir que inclusive trataron de desmontarla (...) Esto nos demuestra lo incorrecto de una política donde la acción de las masas es neutralizada por el partido.”

En la misma línea, cuadros medios de las organizaciones de masas de adscripción sandinista —a la vez que estas organizaciones empezaban a retomar importantes márgenes de autonomía respecto a las directrices emanadas de la dirigencia (O’Kane, 1990; 1991)— exigieron a la dirigencia del Frente Sandinista una mayor definición para con las políticas neoliberales que golpeaban sus intereses.

El FSLN, sin embargo, después de las elecciones nunca actuó de manera uniforme. Las razones de ello fueron diversas pero cabe destacar una: la heterogeneidad del colectivo sandinista. Dentro del FSLN siempre han existido diversas realidades, y no sólo en función de la opinión política, sino también —y sobre todo— en función de la forma de vivir la realidad nicaragüense.

Si tuviéramos que agrupar y clasificar estos sectores cabría exponer dos ejes específicos: 1) La diversa naturaleza de sus recursos y su tipo (y capacidad) de influencia en la sociedad; y 2) Su posicionamiento frente a las políticas neoliberales ejercidas por el ejecutivo.

### CLASIFICACIÓN DE LOS SECTORES SANDINISTAS

	Actitud de consenso respecto a las políticas del ejecutivo	Actitud conflictiva respecto a las políticas del ejecutivo
Recursos institucionales	1	2
Recursos institucionales	3	4

En base al cuadro de doble entrada expuesto arriba podemos calificar —a sabiendas de la simplificación que eso supone— los diversos sectores del sandinismo. En el cuadrante 1 figuran aquellos sectores que han colaborado con el ejecutivo desde instituciones del Estado, sean éstas el grupo parlamentario, puestos jerárquicos de los cuerpos armados o de la Administración del Estado; en este sector —a inicios de los noventa— figuraban como cabezas más visibles Humberto Ortega, en tanto que comandante en jefe del Ejército Popular Sandinista (EPS), y Sergio Ramírez, en tanto que portavoz de la bancada del FSLN. En este sentido, cabe interpretar las declaraciones de Humberto Ortega respecto al llamado “co-Gobierno” (*Barricada*, 15-12-1994):

“No hubo pacto. Simplemente buscamos (con Antonio Lacayo) las bases mínimas de estabilidad para la gobernabilidad en este país, en donde todavía había una Contra armada, una derecha embriagada por el triunfo electoral y un sandinismo aturdido...”.

En el cuadrante 2 aparecen diversos sectores del sandinismo —calificados en su primer momento bajo los nombres de la “corriente de centro” o el movimiento “Convergencia Democrática Nacional”— liderados por profesionales y figuras de reconocido prestigio pertenecientes al FSLN y que ocuparon posiciones de responsabilidad en la Administración del Gobierno revolucionario. En el cuadrante 3 figura la jerarquía partidaria del FSLN —liderada por Daniel Ortega— la cual mantiene una confusa red de *colaboración de acoso-y-pacto* con el ejecutivo. En el último cuadrante figuran aquellos sectores que mantienen una actitud activa contra las políticas de ajuste llevadas a cabo por el ejecutivo y luchan por mantener los espacios y conquistas adquiridos durante el período de la revolución<sup>17</sup>;



entre las organizaciones más representativas de este colectivo figuran diversas corrientes de opinión vinculadas a Organizaciones No Gubernamentales, cuadros medios del FSLN –como el “Grupo de los 29”– y las Organizaciones de Masas de adscripción sandinista, donde destaca la central sindical Frente Nacional de Trabajadores.

El gráfico anterior, sin embargo, deja de lado a la mayor parte del colectivo en que se apoyó la revolución sandinista durante los ochenta o, como mínimo, durante una buena parte de la década. Ésto es, gran parte de los colectivos de ciudadanos nicaragüenses. Para éstos la realidad cotidiana ha redefinido sus prioridades. La política –o “politiquería”– ya no les interesa. Se diría que el desencanto y el retorno a la esfera privada –y esta faceta no es exclusiva de los sectores sociales más débiles– es la nota más destacada de los noventa... En este sentido, si tuviéramos que tomar una frase que nos sintetizara el estado de ánimo de los nicaragüenses (esos que cada día tienen que enfrentarse con la realidad dictada por el ajuste y la precariedad) respecto a las elites políticas y sus proyectos, ésta sería el estribillo acuñado por el cantautor cubano Jaime Formell en uno de sus boleros:

*“Ya nadie quiere a nadie  
Se acabó el querer”*

A pesar de esta esquemática y simplificadora clasificación, la realidad de Nicaragua se presenta confusa; la fluidez de las adscripciones políticas y la frágil textura social sobre la que se aplican duras políticas de ajuste parecen configurar un sendero que traza un futuro incierto.

## ENFRENTAMIENTO PARTIDARIO Y DESCOMPOSICIÓN SOCIAL: BIENAVENTURADOS LOS QUE TIENEN FE<sup>18</sup>

En materia política, económica y social, las primeras decisiones tomadas por la Administración Chamorro revelaron tempranamente los valores en que se fundamentaban sus políticas y los intereses a que respondían. La formulación de un plan inicial de estabilización ignorando la realidad de un país en posguerra; la reducción drástica de los presupuestos de sanidad, educación y servicios sociales; la aprobación –junto con la polémica desatada– de los decretos 10-90 y 11-90; la suspensión de la Ley de Servicio Civil, con el consiguiente despido de trabajadores del sector público; y el acelerado plan de privatizaciones, demostraron prontamente el carácter del nuevo Gobierno (Gomà, 1994: 12-13).

A partir de 1991 se produjo en la Administración nicaragüense un *policy change* en materia social y económica hacia contenidos netamente fondomonetaristas. Por una parte, las nuevas políticas se basaron en la captación de recursos externos de carácter

excepcional para la importación masiva de bienes de consumo y para el pago de la deuda externa. Por otro lado, se definieron estrategias privatizadoras y desreguladoras que confían a las fuerzas del mercado la reactivación interna, con algunas políticas de oferta y protección, pero sin programas integrales de apoyo al tejido productivo nacional. Finalmente, se ha ido reduciendo de forma drástica el gasto social en una ya contrastada combinación de valores ideológicos y argumentos técnicos: la necesidad de poner fin a las tensiones monetarias y reducir drásticamente los índices de inflación.

Las dinámicas y los resultados que tales políticas han generado pueden sintetizarse, en el ámbito macroeconómico, en un acelerado ensanchamiento de la brecha comercial, una fuerte caída del sector exportador y la incapacidad para generar crecimiento (sea éste equitativo o desigual, como lo fue en los años cincuenta y sesenta). Por lo que respecta la vida cotidiana, los efectos han sido la continua pérdida de empleos y la informalización del trabajo, contracción de la renta familiar disponible, y el incremento de la población que vive bajo condiciones de pobreza, tal como lo han reflejado diversos indicadores respecto a la mortalidad infantil, alfabetización o acceso a la vivienda, sobre todo en las zonas rurales (Close, 1995; Kampwirth, 1995).

En este contexto, uno de los rubros más significantes de la economía nicaragüense durante este último lustro –al igual que el resto de países centroamericanos<sup>19</sup>– ha sido el de las remesas de dólares de los emigrantes a sus familiares. Este doloroso mecanismo se ha convertido uno de los más recurridos en pos de la supervivencia y, en esta dirección, se ha acuñado la sarcástica expresión de aquellos que tienen *fe*: aquellos que viven (o sobreviven) gracias a las remesas que les envían sus *familiares en el extranjero*.

En referencia a las afirmaciones arriba expuestas, adjuntamos tres cuadros significativos de la evolución de la situación económica nicaragüense, caracterizada por la incapacidad de generar crecimiento (cuadro n°1) y por los efectos –en los salarios reales (cuadro n°2) y en el desempleo (cuadro n°3)– de las duras políticas de ajuste implementadas durante este último lustro.

#### **Cuadro n°1. EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO**

En precios constantes de 1980, en Nuevos Córdoba

	1988	1989	1990	1991	1992	1993
PIB	18,47	18,16	18,11	18,07	18,13	18,03
(%)	n/a	-1,7	-0,3	-0,2	0,3	-0,6
PIB per cápita	5.102	4.856	4.680	4.517	4.390	4.232
(%)	n/a	-4,8	-3,6	-3,5	-2,8	-3,6

(Fuente: *The Economist Intelligence*. Unit Limited 1994: 17)

**Cuadro 2.** EMPLEO, SALARIOS REALES Y DESEMPLEO

	1988	1989	1990	1991	1992	1993
*PEA (000)	1.225	1.227	1.331	1.386	1.438	1.490
Paro (000)	73	107	149	197	256	325
**Salario real	-42,6	35,6	64,9	-4,5	11,4	n/a

(Fuente: *The Economist Intelligence*. Unit Limited 1994: 17)

\*PEA: Población económicamente activa

\*\*Salario real en la variación porcentual anual

**Cuadro 3.** PARO EN ZONAS URBANAS. (Variación del porcentual anual)

1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
4,7	5,8	6,0	8,4	11,1	14,2	17,8	21,8	23,5

(Fuente: CEPAL, 1994: 40)

El análisis de las políticas socioeconómicas del ejecutivo Chamorro-Lacayo nos lleva a sostener la clara disposición de éste a redefinir en profundidad los papeles del Estado en los procesos de acumulación y redistribución del excedente. La remercantización de las parcelas de producción pública, y de los procesos de consumo de bienes y servicios básicos, prefiguran un nuevo tipo de Estado –de notable implantación en América Latina– que residualiza sus funciones de bienestar y se convierte en habilitador de nuevos beneficios para los sectores económicos dominantes (Gomà, 1994:15).

Con todo, frente a la galopante precarización del tejido social nicaragüense, si bien han emergido gran cantidad de grupos de base y se han revitalizado dinámicas de solidaridad entre colectivos populares como reacción a la ofensiva neoliberal, esta dinámica y operatividad no se ha observado en las elites políticas del sandinismo (ver en este sentido *Envío*, 1994/151:3-12). Contrariamente a ello, la dirección del sandinismo ha ido enzarzándose en un enfrentamiento partidario en el que no se discuten proyectos alternativos a la situación actual. Si bien todos ellos se proclaman herederos de las escencias patrias del sandinismo y de la revolución, parece que se ha puesto mayor énfasis en la búsqueda de conflictos internos que en el empeño de cómo enfrentar este nuevo contexto.

En el Congreso Nacional del FSLN celebrado en julio de 1991, el Frente Sandinista no obtuvo el efecto dinamizador que los militantes esperaban. La Dirección Nacional (DN) (máximo órgano partidario) se mantuvo intacta –sólo se incorporaron Sergio Ramírez y René Núñez, quienes de facto ya pertenecían a ella– perpetuando su inoperancia, falta de liderazgo y ambigüedad para con las políticas del Gobierno. En marzo de

1992 en la DN se mantuvo una reunión de 12 horas con Antonio Lacayo para prevenir una *explosión social*. En la misma dirección, la presencia de Daniel Ortega en el equipo gubernamental nicaragüense en la conferencia de donantes celebrada en Washington y auspiciada por el FMI y el Banco Mundial crearon una actitud de escepticismo respecto a un posible programa económico alternativo impulsado desde el sandinismo.

En el seno de la dirección del FSLN, sin embargo, fueron apareciendo dos perfiles que, en un inicio, se caracterizaron más por su división del trabajo que por su ideario. Por un lado, en diversos espacios institucionales –con un protagonismo particular de la bancada sandinista liderada por Sergio Ramírez– el FSLN fue tejiendo una red de compromisos con el ejecutivo con el fin de preservar la integridad del sistema institucional surgido de la Constitución de 1987. Por otro, desde las estructuras partidarias del FSLN –lideradas por Daniel Ortega– se mantenía una estrategia dual de apoyo a las movilizaciones populares contra las políticas económicas de ejecutivo para, en última instancia, terminar negociando con el Gobierno aduciendo la necesidad de un *diálogo nacional*.

En 1993, con el incremento de la polarización política nicaragüense (con la crisis de los rehenes; la efervescencia paramilitar en las zonas rurales con los *recontras*, *recompas* y *revueltos*; la toma de Estelí; y la dureza de las manifestaciones y huelgas) un sector del sandinismo –especialmente cuadros medios del partido, líderes sindicalistas, ex oficiales del EPS e intelectuales vinculados a centros de estudio y ONG– empezó a formar una corriente de opinión que exigía un posicionamiento más firme de la dirección del FSLN frente a las políticas de los neoliberales.

El origen de esta corriente fue el manifiesto elaborado por el llamado “Grupo de los 29” en julio de 1993, uno de cuyos objetivos era exigir a la Dirección Nacional una política de clara oposición frente al ejecutivo. En la misma dirección, en enero de 1994, 56 militantes sandinistas mantuvieron un encuentro en la Escuela Sindical Pikin Guerrero donde se redactó una propuesta donde se reivindicaba una mayor combatividad del FSLN en la defensa de los pobres, su vocación revolucionaria y su naturaleza vanguardista. Esta propuesta –que abría el debate en vistas a la celebración del congreso extraordinario del FSLN en mayo– se publicó en febrero y fue firmada con el nombre de *Izquierda Democrática Sandinista*.

En referencia a la radicalización programática exigida por este colectivo había quien, como Mónica Baltodano, ex ministra de la Presidencia y una de las representantes más beligerantes del grupo de *Izquierda Democrática*, opinaba que existía el riesgo de que el FSLN dejara de ser un partido de izquierdas (BI, III-1994:5):

“Existe el riesgo de que el FSLN deje de ser un partido de izquierda. Eso ya ha sucedido en muchas partes de América Latina donde, por medio de procesos de reacomodo, algunos partidos han devenido reformistas”.

Por otro lado, el grupo liderado por Sergio Ramírez, caracterizado por su estrategia de negociación y concertación con el Gobierno, argumentó que la irrupción de una

oposición frontal al ejecutivo y una mayor polarización política sólo favorecía a la derecha antisistémica. En la dirección expuesta, a inicios de de 1994, empezó a cristalizar una corriente que se dio a conocer con un texto llamado “Por un sandinismo que vuelva a las mayorías”, donde se enfatizó la naturaleza pluriclasista del partido, la necesidad de un amplio consenso para crear un clima de estabilidad y un mayor realismo en la esfera internacional. Esta propuesta, según Ramírez era clara (BL,IV-1994:19):

“Estoy proponiendo al FSLN y a la sociedad nicaragüense un partido transformado, renovado y asentado en bases verdaderamente democráticas en su funcionamiento interno.”

Las dos propuestas de debate se situaban en una doble dimensión: la de debatir las estrategias a seguir en el sandinismo durante los noventa –aunque los dos textos propuestos tenía más diferencias de retórica que de fondo (*Envío*, 1994/151)–, y la de marcar una postura de fuerza en el Congreso extraordinario del FSLN. La segunda dimensión, sin embargo, tuvo un impacto mayor: no hubo debate y sí lucha por la obtención de mayores cuotas en el seno del aparato partidario.

El Congreso extraordinario del FSLN tenía como objetivo la elección de un nuevo liderazgo y la de dinamizar el partido para las próximas elecciones de 1996. Realmente sólo se llevó a cabo el primer punto y a precio de agudizar las divisiones internas ya existentes. Los temas que en un principio tenían que debatirse –las relaciones de propiedad, la relación del FSLN con el Gobierno, la composición social del FSLN y las Relaciones Internacionales– quedaron relegados a un segundo plano. Los delegados elegidos en el anterior congreso votaron mayoritariamente a la corriente de la *Izquierda Democrática*, que gozaba del beneplácito del aparato partidario. La nueva Dirección Nacional, que se amplió a 15 miembros, mostraba una reacción de 11 miembros de la *Izquierda Democrática* y 4 de *Las Mayorías* (Sergio Ramírez no fue elegido).

Posteriormente, los conflictos entre diversas personalidades del sandinismo fueron encadenándose hasta llegar a la separación formal de miembros vinculados con el sector de Ramírez para formar el Movimiento de Renovación Sandinista (MRS) a finales de 1994. Durante 1994 se observaron agrias disputas en el sandinismo –y particularmente en el interior del grupo parlamentario que finalmente se dividió– respecto a la reforma y aprobación del nuevo Código Militar y Código del Trabajo, a la elección de los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia y, finalmente, respecto a la reforma constitucional, donde se desencadenó un fuego cruzado de acusaciones, llegando a acusar a uno de los bandos, el de *Las Mayorías*, de artífice de otro *Espino Negro*<sup>20</sup> (*Barricada*, 6-XI-1994). También fue problemático el cambio del equipo de dirección del periódico *Barricada* –encabezado por Carlos F. Chamorro, firmante del manifiesto de “las mayorías”–, y las renuncias a la militancia del FSLN de destacadas personalidades como Ernesto Cardenal o Carlos Tunerman.

Cabe preguntarse si este confuso paisaje –donde se cruzan acusaciones y denuncias entre dirigentes sandinistas– es el incipiente reflejo de dos proyectos claramente diferenciados o, contrariamente, se debe a la ya tradicional y estéril dinámica de la

izquierda de pelearse unos contra otros. En este sentido, se dice que no hay peor enemigo que los viejos amigos íntimos, quienes le conocen a uno todos los pecados y debilidades. Quizá después de una etapa de confluencia de la izquierda centroamericana (como sucedió con el FSLN a finales de los setenta y con el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) y la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) a principios de los ochenta), ahora, en los noventa, da comienzo otra etapa de naturaleza centrífuga.

## ECUACIONES DE DIFÍCIL SOLUCIÓN

En 1979 el triunfo de la revolución sandinista alteró los términos en que se desarrollaba el debate de la izquierda latinoamericana respecto a temas como la revolución, la lucha política y la conducción partidaria. Así lo expuso Jaime Bateman, líder histórico y cerebro del grupo guerrillero colombiano M-19, a inicios de los años ochenta (Bateman en Rénique, 1995: 182):

“La lucha armada se ha reafirmado como la única solución cuando el pueblo tiene que enfrentarse al imperialismo y a la oligarquía”.

A inicios de los noventa, con la derrota electoral del FSLN, se diría que uno no pudiera ni plantearse el proyecto de la izquierda latinoamericana *en términos de bolero*: “(...) *Y lo que pudo haber sido y no fue*”.

Es ya un lugar común reafirmar que con la derrota sandinista la izquierda latinoamericana cierra un ciclo iniciado en 1959, cuando los barbudos de la Sierra Maestra entraban victoriosos en la Habana. Con todo, los grandes problemas por los que otra luchó la izquierda siguen incólumes. Queda en el aire, sin embargo, el cómo proyectar de forma novedosa y efectiva nuevas formas de proceder.

Hace ya un lustro que el sufragio desalojó al FSLN del poder. El sandinismo pasó de una posición política hegemónica a otra de naturaleza sustancialmente diferente. Con la nueva Administración se ha llevado a cabo un proceso de recomposición de las clases tradicionalmente dominantes y se han aplicado políticas basadas en sus intereses.

La situación surgida de las elecciones de 1990 ha redefinido la lógica política nicaragüense en tres ámbitos: el *sistémico*, el *sustantivo* y el *simbólico*. En el ámbito *sistémico*, la rearticulación institucional ha supuesto una nueva centralidad de las elites políticas y económicas en los asuntos públicos. La exclusión de grandes sectores de la población de una *res publica* —o lo que es lo mismo— donde los colectivos pudieran sentirse partícipes, ha ido distanciando la clase política de la mayoría de ciudadanos, diluyendo,

cada vez más, el concepto clásico de representación. En el ámbito *sustantivo*, las políticas públicas ejecutadas desde el Gobierno han redefinido el papel del Estado, residualizando sus tareas de benefactor social y mercantilizando las parcelas de producción pública. Este impulso de la actividad pública hacia los sectores económicos dominantes ha supuesto una dura carga al ya de por sí frágil tejido social nicaragüense, imponiendo un sistema brutalmente regresivo para la mayor parte de los ciudadanos. Finalmente, en el ámbito *simbólico*, se ha desarrollado una dinámica donde predominan las tendencias anómicas que disuelven el debate público y priorizan la vida privada. Actualmente, tal como expone Portantiero (1992:17), el único espacio público que ofrece el Estado es el creado por las pantallas de TV, que unen un agregado de individuos para transmitirles mensajes de exaltación del provecho individual.

En este paisaje, el reto de la fuerza política que gestó y desarrolló el proceso revolucionario nicaragüense ha quedado inmerso en un complejo debate que no es ajeno a la heterogénea naturaleza de dicha formación ni a los dilemas planteados por diversas formaciones políticas progresistas de otras latitudes.

En este cruce de caminos cabe, por un lado, plantearse la posibilidad de incidir desde una postura preeminente en la arena política ofrecida por las instituciones, sin perder la adscripción a los intereses de las grandes mayorías, y sin tensar el ya de por sí frágil entramado democrático. Por otro lado, está el reto de vincular en un proyecto definido –sin acortar su autonomía– a los nuevos movimientos populares revitalizados al calor (o frío) de las duras políticas de ajuste. Este resurgimiento de colectivos organizados no es ajeno a la experiencia revolucionaria ni a las necesidades planteadas por la cotidianidad. La experiencia adquirida por grandes sectores pertenecientes a las capas más humildes de la población nicaragüense en tareas colectivas (el cómo organizarse, reivindicar y expresar –generalmente por primera vez en su vida– sus demandas y puntos de vista) forma parte de los beneficios *intangibles* producto del proceso revolucionario.

Lo indicado no conforma una receta, sino que expone la complejidad de la tarea a la que se enfrenta la izquierda de estos pequeños países periféricos para articular, sin estereotipos, un proyecto que articule tres grandes retos sin los cuales difícilmente podrán alejarse del círculo vicioso del subdesarrollo: el crecimiento económico, la equidad y la reforma democrática.

No deja de ser difícil, sin embargo, el mantenimiento de las instituciones democráticas en un país como Nicaragua donde no todos los actores las observan como el espacio ideal donde satisfacer sus intereses (Everingham & Roig, 1995). Przeworski (1991:53-57) expone que la duración y estabilidad de los regímenes depende de las actitudes de los tecnócratas, los políticos en el poder y la población. Asumiendo que la población quiere comer, los tecnócratas quieren triunfar y los políticos quieren gozar de apoyo y prestigio, la democracia en Nicaragua se enfrenta a una difícil –aunque no imposible– ecuación.

## A MANERA DE EPÍLOGO: LAS ELECCIONES DE OCTUBRE DE 1996 Y SUS CONSECUENCIAS

A manera de epílogo y para finalizar el presente artículo, cabría hacer referencia al polémico proceso electoral acaecido en Nicaragua el 20 de octubre de 1996 y sus repercusiones, tanto a nivel nacional como partidario.

Antes que nada, es importante señalar las raíces del caótico proceso. Entre las más notables, se observan la desorganización y desidia de los responsables de la infraestructura técnica y el andamiaje jurídico e institucional del proceso (el Consejo Supremo Electoral y los diputados de la Asamblea Nacional), producto de la progresiva debilidad e incoherencia institucional en que se vio inmersa Nicaragua durante estos últimos años. Ejemplo de ello fue que la *Ley Electoral*, aprobada a pocos meses de la celebración de los comicios, se caracterizó por su excesiva politización –dejando su administración en manos de los partidos políticos–, por las múltiples vías que se ofrecía para la impugnación de los resultados y por el difícil procedimiento de confección del registro electoral. Todo ello en un país donde en amplias zonas rurales –a pesar de la desmovilización formal de la *Contra*– se mantuvieron activos diferentes colectivos armados que desarrollaron actividades de extorsión y proselitismo.

En el resto del país, a pesar del alto nivel de apatía, frustración y alienación de los ciudadanos para con la clase política y las instituciones, el proceso electoral puso en evidencia otra variable susceptible de movilizar a los potenciales electores: *la polarización política*. De esta manera, mientras el cierre de campaña se aproximaba, se hacía cada vez más evidente que sólo existían dos opciones con posibilidades de ganar –el FSLN y la Alianza Liberal– y que éstas se situaban en los dos polos del abanico político. El FSLN, con su candidato presidencial Daniel Ortega, desarrolló una campaña marcada por la moderación –buscando el electorado de centro–, a sabiendas de que ninguna formación política le socavaría el espacio político por la izquierda, y lanzó un mensaje de reconciliación y unidad con el *slogan* de “*el gobierno de todos*”. La campaña liberal, en cambio, mantuvo el tono opuesto y utilizó la estrategia de *todo vale* contra el sandinismo y *todos contra ellos*<sup>21</sup>.

Los resultados se hicieron públicos al cabo de 20 días de las elecciones, y después de múltiples denuncias de opacidad, irregularidades y de acusaciones cruzadas entre las diversas formaciones políticas contra la formación ganadora: la Alianza Liberal. En las elecciones presidenciales Arnoldo Alemán (candidato liberal) fue el vencedor con un porcentaje del 51% de los votos frente a Daniel Ortega, con un 37’7%. Las elecciones legislativas también tuvieron una lógica bipolar, otorgando 42 y 36 diputados a las dos fuerzas mayoritarias. El efecto más nocivo de este confuso (¿quizá fraudulento?) proceso fue, sin duda, la total deslegitimación de la institución electoral y el continuo *empantanamiento* de la escena política nacional, abriendo una nueva *crisis* política.



En otro orden de cosas, a nivel partidario, el sandinismo –quien otrora coreaba ser la organización política más disciplinada y organizada– observó que pese a su *renacimiento electoral* no dispuso de una militancia organizada, preparada y capaz de fiscalizar el proceso en todo el territorio nacional. Las deficiencias del sandinismo no sólo emergieron a la luz de una retórica genérica y ambivalente; también se entrevieron en su descoordinación organizativa entre sus diversos niveles (local, departamental y nacional) y, con especial énfasis, en el legado de las confrontaciones y peleas intestinas. Precisamente por ello, a pesar de todo, el FSLN obtuvo unos resultados mejores de lo que se esperaba, mejorando incluso su posición respecto a las elecciones de 1990. No cabe duda, pues, de que el pueblo fue misericordioso con el sandinismo si tomamos en cuenta el refrán de que *cada uno recoge lo que cosecha*. Esperemos, en todo caso, que en el próximo sexenio la *cosecha* sea mejor o, como mínimo, que los *labradores* le den más atención a las semillas, al abono y a los aperos de labranza.

#### Referencias bibliográficas

- Agüero, F. y Torcal, M. (1993) “Élites, factores estructurales y democratización”, *Revista Estudios Políticos*, 80.
- Balmori, D. et al. (1990) *Las alianzas de familias y la formación del país en América Latina* México: FCE.
- Bataillón, G. (1993) “La violencia en Nicaragua y El Salvador. 1991-1992” *Polémica*, 19.
- Biscopling K. & Schuman, H. (1992) “Pens and Polls in Nicaragua: An Analysis of the 1990 Preelection Surveys”, *AJPS*, 36-2.
- Casaús, M. (1992) “La metamorfosis de las oligarquías centroamericanas”, *Revista Mexicana de Sociología*, 3.
- Castañeda, G. (1993) *The Utopia Unarmed*. New York: Vintage.
- Castro R. y Barry, D. (1990) “Cuatro hipótesis para entender la transición” *Pensamiento Propio*, 66.
- (1990) “Porqué el FSLN perdió el vínculo con las masas”, *Pensamiento Propio*, 72.
- CEPAL (1994.) *Preliminary Overview of the Economy of Latin America and the Caribbean*. Santiago de Chile: UN.
- Close, D. (1995) “Getting shapped: The politics of structural adjustment in Costa Rica and Nicaragua.” Paper presentado para el XIX International Congress of Latin American Studies Association (Mimeo).
- Crítica (1990.) “Luis Enrique Mejía propone: ¿Dirección Nacional, escuche!”, *Crítica*, 2.
- Díaz-Lacayo, A. (1992) “El FSLN dos años después de la derrota electoral: Aún perdido en la tormenta”, *BI*, 120.
- Dore E. & Weeks, J. (1992) *The Red and Black. The Sandinistas and the Nicaraguan Revolution*. London: ILAS.

- Dossier Ambrosio Mogorrón (1992) Nicaragua y el FSLN después de las elecciones (Mimeo).
- Dunkerley, J. (1992) *Political Suicide in Latin America*. London: Verso.
- Economic Intelligence Unit (1994). "Nicaragua & Honduras", *Country Profile* London: EUI.
- Envío (1990) "El FSLN en su laberinto", 103.
- (1990) "Qué hacer: hacia el Congreso del FSLN", 105
- (1992) "Claves para iniciar un debate necesario", 134.
- (1993) "La clave es la indefinición", 138.
- (1993) "Polarización al rojo vivo.", 141.
- (1994) "Élites sin proyecto nacional", 151.
- (1994) "Congreso del FSLN: ¿Qué está en juego?", 151.
- Everingham, M. & Roig, E. (1995) *Central America. Balancing Development and Democracy in the 1990s*. Washington: Institute for Central American Studies.
- Fernández Ampié, R. (1993a). "Rumores de guerra", *BI*, 359.
- (1993b) "El país entre secuestros", *BI*, 365.
- Font J. y Gomà, R. (1990) "Análisis de las elecciones nicaragüenses de 1990", *Afers Internacionals.*, 70.
- Gomà, R. (1994) "Cambio Político y Políticas Públicas en Nicaragua (1979-1993): Pautas de interacción". UAB (Mimeo).
- Gunter R. & Higley F. (eds), (1992) *Elites and democratization consolidation: Latin America and Southern Europe*. Cambridge University Press.
- Karl, T. (1990). "Dilemas of Democratization in Latin America", *Comparative Politics*, 23.
- Kampwirth, K. "Social Policy un Nicaragua, 1990-1995". Paper presentado para el XIX International Congress of Latin American Studies Association (Mimeo).
- LASA, (1990) *Electoral Democracy. Under International Pressure*. Pittsburg: LASA.
- Martí, S. (1992) *FSLN del poder revolucionari a l'oposició parlamentària*. Barcelona: UAB.
- (1994) "La Revolución enredada. Un análisis de los actores políticos nicaragüenses 1977-1992". Managua: UCA (en prensa)
- McCoy, S. (1991) "Notes on the Process of Democratic Consolication in a post-revolutionary context: From bargaining to social concertation in Nicaragua". XVI LASA Congress (Mimeo).
- Nohlen, D. y López-Pintor, M. (1992) "Government and Opposition facing Opening Elections: How was it in Nicaragua?" IEP Heidelberg-UAM (Mimeo).
- O'Donell G. et al, (1986) *Transiciones desde un gonierno autoritario*. Buenos Aires: Paidós.
- O'Kane, C. (1990) "Frenando la contrarrevolución", *Pensamiento Propio*, 76.
- Pons, T. (1993) "Nicaragua. Capitalismo insufrible, socialismo increíble", *Viejo Topo*, 70.
- Portantiero, A. (1992) "Foundations of a new politics", *NACLA*, vol. XXV.
- Przeworski, (1985) *Capitalism and Social Democracy*. Cambridge University Press.
- (1991) *Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America*. Cambridge University Press.
- Ramírez, S. (1991) *Nicaragua en el corazón*. Managua: Nueva Nicaragua.
- Rénique, P. (1995) "The Latin American Left: Epitaph or New Begining?", *LARR*, 30.

- Stone, S. (1990) *The Heritage of Conquistadores. Ruling Classes in Central America from the Conquest to the Sandinistas*. Lincoln: Nebraska University Press.
- Touraine, (1989) *América Latina. Política y Sociedad*. Madrid: Espasa Calpe.
- Vargas, V. (1990) "Los hombres de la Presidenta", *Crítica*, 2.
- Vickers, J. (1990) "A Spider's Web", *NACLA*, vol.XXIV.
- Vilas, C.M. (1990a) "Especulaciones sobre una sorpresa: Las elecciones en Nicaragua", *Desarrollo Económico*, 118.
- (1990b) "What Went Wrong", *NACLA*, vol.XXIV.
- (1991a) "Factores endógenos y elecciones en la democratización de Nicaragua" (Mimeo).
- (1991b) "El debate interno sandinista" CIIH-UNAM (Mimeo).
- (1992) "Asuntos de familia: Clases, linaje y política en la Nicaragua contemporánea", *Polémica*, 18.

#### Notas

1. Extraído de una entrevista a Mario Montenegro en *Barricada Internacional*, 3-1994:40.
2. Sobre esta cuestión es interesante el trabajo de: (Bischoping & Schuman, 1992:331-350). En éste se realiza un estudio exhaustivo de las encuestas de intención de voto realizadas durante el año anterior a las elecciones.
3. Otra cuestión que tampoco cabe tratar aquí aunque sí es importante hacer referencia es la incredulidad de los sandinistas respecto a la posibilidad de una alternancia en el poder, elemento central de las instituciones democráticas y razón de ser de la convocatoria electoral. Sobre este punto -la concepción de las elecciones y la sociedad civil- Castañeda elabora una dura crítica al FSLN (Castañeda, 1993: 344-357).
4. Son muchos los trabajos que pretenden analizar la derrota electoral del FSLN, el comportamiento electoral de los nicaragüenses y su implicación en la futura dinámica política. Entre ellos cabe destacar: (Dore & Weeks, 1991; Dunkerley, 1992; Font y Gomà, 1990; LASA, 1990; Nohlen y López-Pintor, 1994; Vickers, 1990; Vilas, 1990a, 1990d).
5. Expresión extraída de: (*Crítica*, 1990:48).
6. Los orígenes de este pacto se remontan a la promulgación de la Constitución de 1987 -y a la legislación subsiguiente-, a los acuerdos regionales que se desarrollaron a partir de Esquipulas II en agosto de 1987, y el Diálogo Nacional posterior llevado a cabo en las rondas negociadoras en el marco de la Comisión Nacional de Reconciliación.
7. Para nosotros el concepto *democracia* tiene un contenido que trasciende al de elecciones competitivas. Con todo, las "elecciones competitivas" forman parte sustancial del proceso de *democratización*.
8. Los ejes centrales del PTPE fueron 10 (Barry y Castro, 1990a:20): 1. El reconocimiento de las pasadas elecciones como una base para el fortalecimiento del proceso democrático y para alcanzar una

- paz justa y definitiva; 2. El respeto hacia las transformaciones alcanzadas y garantizadas en la Constitución; 3. La desmovilización de la RN antes del 25 de abril, en tanto que elemento escencial para la transferencia de Gobierno en un clima de paz; 4. La subordinación de las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad al presidente de la República, y su redimensión de acuerdo con la capacidad económica y necesidades sociales. Dichas fuerzas tendrían un carácter profesional y no partidario. El respeto de la integridad del ejército regular (EPS) y de las fuerzas de orden público, así como sus rangos, escalafones y mandos según la Constitución; 5. El fortalecimiento de la integridad e independencia de los poderes del Estado; 6. Garantizar jurídicamente a todas las familias beneficiarias de las propiedades urbanas y rurales asignadas antes del 25 de febrero de 1990; 7. El traspaso ordenado del poder ejecutivo en un marco de mutua seguridad y confianza. El mantenimiento de las armas y equipos de combate en manos de las instituciones armadas de la República. El respeto hacia los gremios, organizaciones sindicales y comunales de adscripción sandinista; 8. La permanencia en su trabajo de los funcionarios y empleados del Gobierno; 9. La voluntad de aunar esfuerzos en la gestión de recursos internacionales en beneficio de la estabilidad y del crecimiento de la economía; 10. La organización del Ministerio del Exterior, en consulta con el Gobierno entrante, de los actos protocolarios y diplomáticos de la presidencia.
9. La gravitación de las familias y los grupos de linaje en la configuración de la estructura socioeconómica de América Central ha sido destacada por varios autores (Balmori et al, 1990; Casa's, 1992; Stone, 1990; Touraine, 1989; Vilas, 1992).
  10. Por otro lado, en la ya de por sí frágil coalición de partidos que concurrieron en los comicios bajo las siglas de la UNO, la firma del PTPE y la creación de un ejecutivo donde tenían más peso las lealtades personales que la adscripción partidaria, generaron un progresivo distanciamiento entre las diversas formaciones partidarias que, con el tiempo, se irían convirtiendo en un enfrentamiento abierto (ver Martí 1994:148-162).
  11. Sobre la renovación organizativa que supuso el Congreso Nacional de agosto de 1991, su nuevo marco estatutario y la correlación de fuerzas en él existente, ver: (Martí, 1992:136-147).
  12. A partir de entonces, la agitación popular, la conflictividad social y la desestabilidad han sido notas constantes en la realidad social nicaragüense. En (Bataillón, 1993) se observa una relación de las huelgas convocadas desde 1990 hasta inicios de 1993.
  13. Texto extraído de *Barricada*:21-2-1992.
  14. Párrafo extraído del texto de Sergio Ramírez en *Barricada*: 8-8-1990.
  15. Párrafo extraído de las declaraciones realizadas en *Barricada* por Rafael Solís, ex secretario de la Asamblea Nacional, diputado sandinista y uno de los máximos impulsores de la corriente "centrista" del FSLN -articulada bajo la calificación de Grupo de Centro o Convergencia Democrática- (Solís en Dossier Ambrosio Mogorrón, 1992).
  16. Párrafo extraído de (Vargas en Vilas, 1991:9).
  17. Sobre la revitalización de los movimientos populares y de las diversas centrales sindicales sandinistas -que se insertan en el cuadrante nº 4 de nuestra clasificación- cabe anotar brevemente el contexto en que acaeció su reactivación. La reactivación de la movilización sindical estalló

con fuerza a inicios de 1991 y ha ido creciendo. Una huelga de dos meses (enero-febrero) en los sectores de sanidad, aduanas y servicios, la huelga de bancos y correos en marzo, la de enseñanza en mayo, de transportes en septiembre, de los ingenios de azúcar en octubre y los enfrentamientos entre trabajadores y policía a partir de octubre debido a la privatización de empresas estatales, son el balance del agitado año 1991. No menos calientes se han mostrado los años siguientes por lo que hace la movilización sindical y a las manifestaciones callejeras. El colapso de la capital nicaragüense durante la última semana de septiembre de 1993 a raíz de la huelga de transporte dio la sensación de que la situación era casi incontrolable -así lo demostraban la presencia de más de 90 barricadas y de armas de fuego en la calle. Dicho paisaje da cuenta de la precariedad en que se sustenta la legitimidad del actual Gobierno y del frágil equilibrio sociopolítico en que se mueve el país (sobre esta situación ver: Bataillón 1993, Envío 1993/138, Envío 1993/141, Fernandez Ampí 1993, Pons 1993).

18. En este caso la *FE* no se refiere al sustento espiritual sino al sustento que suponen las remesas de dólares procedentes de los *Familiares en el Extranjero*.
19. En el caso salvadoreño este rubro significa ya el componente más importante de su economía, superando las exportaciones de café.
20. *Espino Negro* es el nombre en que se conoce el pacto realizado en 1927 entre el representante norteamericano Henry Stimson y el general liberal José María Moncada en que se pacificó el país de una guerra civil y se acordó la permanencia política y militar de los Estados Unidos en Nicaragua. Todos los representantes políticos estuvieron de acuerdo con dicho pacto menos el general Augusto César Sandino quien tomó sus hombres y se dirigió hacia el norte para establecer un foco de resistencia contra la presencia norteamericana.
21. Para un buen análisis de la campaña electoral, los resultados y sus posibles consecuencias, ver: (*Envío*, 1996/176-177).